

O/N. 234

M 11

II

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES
PROVINCIA DE SANTA CRUZ

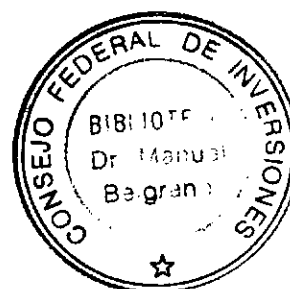
42154

"Asesoramiento en materia legal- catastral"

Segundo Informe Parcial

Escr. Luis Marinelli

Diciembre de 1999



La Plata, 20 de Diciembre de 1.999.

Sr. Secretario del Consejo Federal de Inversiones

Ing. Juan José CIACERA.-----

S/D.-----

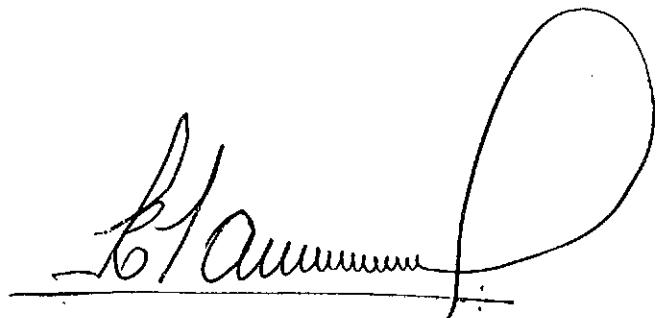
-En cumplimiento a la cláusula 25 del Contrato de Obra, que sobre "Asesoramiento en Materia Legal-Catastral" para la Provincia de Santa Cruz, suscribiera con ese Organismo, adjunto en la forma requerida, los informes correspondientes a la Segunda Etapa de Labor (Segundo Informe Parcial), que comprende:

Tarea 3: Elaboración del Proyecto de Decreto Reglamentario con sus fundamentos.

Tarea 4: Consideración de las propuestas normativas con los funcionarios provinciales.

Cabe hacer notar que la presente se efectúa dentro del plazo legal convenido.

Saludo a Usted muy atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Cesar Marinelli', written over a horizontal line. The signature is stylized with a large loop at the end.

Esc. Luis César MARINELLI

D.N.I.: 16.727.602.

1º pº g -

TAREA 3: REGLAMENTACION LEY DE CATASTRO - SANTA CRUZ

Visto, el Expediente N* , por el cual, la Dirección Provincial de Catastro, eleva el Proyecto de Decreto Reglamentario de la Ley Provincial de Catastro; y

CONSIDERANDO:

Que la citada Ley, introdujo al régimen catastral, normas y procedimientos ajustados a las nuevas tecnologías de registración y publicidad de los actos catastrales, mediante la instauración de una estructura catastral multifuncional, que a la par de asegurar la celeridad y eficiencia de los actos administrativos, otorgará el máximo de garantía a los intereses económicos de los contribuyentes.

Que se hace necesario, fijar las normas operativas, a los efectos de posibilitar la puesta en vigencia de los contenidos de la Ley.

Que el conocimiento de la riqueza inmobiliaria, requiere precisar con cierto grado de exactitud, el estado de hecho de los inmuebles, como medio de asegurar el trafico inmobiliario y la ajustada valuación fiscal de los mismos.

Que si bien, el marco normativo básico, se instrumenta en la referida Ley, para su inmediata aplicación, se requiere contar, con las normas operativas que viabilicen el objetivo legal, que

preconize la puesta en marcha integral de la obra catastral, con un criterio polifuncional de información territorial.

Que resulta igualmente necesario, establecer los procedimientos a los que deben ajustarse, las distintas instituciones provinciales, que por la naturaleza de sus funciones, generan o utilizan información inmobiliaria, cuyo conocimiento integral, solo se logrará a través de un adecuado sistema de intercambio y de coordinación informativa interinstitucional.

Que por último, dada las reformas fundamentales introducidas por la Ley al Régimen Catastral, es necesario autorizar a la Dirección Provincial, para fijar la fecha de implementación total o parcial de los procedimientos establecidos en el presente decreto, como así facultarla para convenir con otras reparticiones provinciales o municipales, en este último caso ad referendum del Poder Ejecutivo, programas conjuntos de actualización y conservación catastral.

**POR TODO ELLO, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE
SANTA CRUZ**

DECRETA

CAPITULO I

Artículo 1: Las disposiciones contenidas en la Ley N° se aplicarán a partir de los 90 días de la publicación del presente decreto, en concordancia a lo establecido en el primer apartado del artículo 70 de la misma.

Artículo 2: A los efectos establecidos en el artículo 4 de la Ley, son soluciones de continuidad, las separaciones que dentro de los inmuebles originen las líneas ferroviarias, las corrientes de agua, los canales, los caminos generales que los atraviesen o cualquier otro accidente geográfico, que no sean del dominio del propietario cuyas parcelas afectan, así como las líneas demarcatorias de los ejidos municipales.

CAPITULO II - DEL ESTADO PARCELARIO Y VERIFICACION

Artículo 3: Previo a la registración de todo plano de mensura en el Organismo Catastral, el profesional interviniente o quien pretenda registrarlo, deberá cumplimentar las exigencias establecidas en el presente decreto para determinar el estado parcelario.

Artículo 4: A los efectos establecidos en el artículo 7 inciso a) de la Ley, serán válidos desde el punto de vista técnico para la determinación del estado parcelario de un inmueble, aquellos planos que cumplimenten las exigencias establecidas en el artículo 6 de la Ley, y los que se encuentren registrados en los Organismos Provinciales o Municipales, protocolos notariales, siempre que satisfagan a criterio del Organismo Catastral las necesidades técnicas, que los hagan compatibles

con las necesidades de publicidad, que el sistema catastral requiere. En estos casos, se deberá dejar constancia en la cédula catastral los datos del autor del plano, sus características y el lugar de su archivo.

Artículo 5: Las disposiciones referidas a la ejecución, procedimiento, contenido, tramitación y registración de expedientes de mensuras, se regirán por las normas que se establezcan en el Reglamento de Mensuras.

Artículo 6: En oportunidad de realizar los actos de verificación, a que se refiere el artículo 11 de la Ley, el profesional interviniente deberá relevar las construcciones y demás accesiones existentes en las parcelas, y valuar las mismas, de acuerdo a los valores, sistema valuatorio y formularios que la Dirección Provincial de Catastro establezca, los que deberán ser registrados en dicha repartición. Igual obligación deberán cumplimentar los profesionales, al presentar en la misma, los planos de mensuras para su registración.

Artículo 7: La Dirección Provincial de Catastro, podrá diferir o exceptuar de la obligación establecida en el artículo 11 de la Ley, cuando existan razones económicas o sociales que lo justifiquen.

Artículo 8: No corresponderá realizar los actos de verificación a que se refiere el artículo 11, en los casos de subparcelas resultantes del régimen de propiedad horizontal, cuando las mismas sean Unidades Funcionales construídas y ubicadas en planta primer piso y siguientes en altura o en planta subsuelo.

CAPITULO III - DEL CERTIFICADO CATASTRAL

Artículo 9: A los efectos señalados en el artículo 35 inciso a) de la Ley, los funcionarios autorizantes solicitarán en un formulario especial, el Certificado Catastral, cuyas características y procedimiento de tramitación y registración fijará la Dirección Provincial de Catastro, debiendo contener como mínimo, los siguientes datos:

- a) Nomenclatura catastral de la parcela;
- b) Ubicación del inmueble (Departamento, Localidad);
- c) Designación del inmueble según título;
- d) Descripción del inmueble según título o plano;
- e) Datos de los propietarios y domicilio fiscal;
- f) Identificación, firma y sello del funcionario autorizante;
- g) Lugar y fecha de su realización.

Artículo 10: La Dirección Provincial de Catastro, expedirá las certificaciones a que se refiere el artículo anterior, mediante una constancia autenticada de los datos requeridos ó a través de una copia certificada de la respectiva cédula catastral.

Artículo 11: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 inciso b) de la Ley, los funcionarios autorizantes, deberán dejar constancia en el cuerpo de la escritura o auto respectivo, de haber tenido a la vista los respectivos certificados, debidamente intervenidos por la Dirección Provincial de Catastro.

Artículo 12: El Certificado Catastral, a que alude el artículo 34 de la Ley, será expedido siempre que se encuentre determinado el estado parcelario, ó estando determinado dicho estado parcelario, no hubieren vencidos los plazos establecidos en el artículo 11 de la Ley. Los documentos necesarios para determinar el estado parcelario, serán la valuación parcelaria y la cédula catastral.

Artículo 13: El Organismo Catastral podrá expedir el Certificado Catastral, sin estar determinado el estado parcelario, cuando existan razones de fuerza mayor, debidamente

fundamentadas, que imposibiliten su determinación y sea expresamente solicitado por el interesado.

Artículo 14: Toda certificación referida a inmuebles, solicitada para instrumentar actos, que implique modificación de la determinación parcelaria registrada otorgada en base a un plano afectado por vicios que invalidan su faz técnica, deberá ser precedido de un nuevo plano de mensura, sin cuyo requisito la Dirección Provincial de Catastro, no expedirá certificación catastral alguna.

Artículo 15: Para el computo del plazo señalado en el artículo 39 de la Ley, el funcionario autorizante, deberá indicar en la respectiva solicitud, el plazo que de acuerdo al artículo 24 de la Ley 17.801, le corresponde según su domicilio legal.

CAPITULO IV - CLASIFICACION PARCELARIA - PUBLICIDAD - RESPONSABILIDADES

Artículo 16: La calificación de parcelas baldías o edificadas, a los efectos establecidos en el artículo 11, incisos a) y b), la efectuará la Dirección Provincial de Catastro, en base a los antecedentes obrantes en la misma.

Artículo 17: A los efectos señalados en el artículo 29 de la Ley, la Dirección Provincial de Catastro, asignará a las parcelas rurales y subrurales, la nomenclatura catastral, de acuerdo al sistema posicional vigente; y a las parcelas urbanas, la nomenclatura tradicional o la que de común acuerdo con los respectivos Municipios, se establezca.

Artículo 18: En los casos de inmuebles fraccionados que originen lotes o subparcelas cuando se tratasen de inmuebles afectados a Propiedad Horizontal, la Dirección Provincial de

Catastro, procederá a empadronar individualmente y de oficio cada uno de los lotes o subparcelas resultantes, a partir de la fecha de registración del respectivo plano en el organismo Catastral. En los casos de subdivisión en propiedad horizontal, sólo se empadronará individualmente las subparcelas resultantes, a solicitud del titular registral.

Artículo 19: A los efectos establecidos en el artículo 40 de la Ley, se considerará que tienen interés legítimo para averiguar el estado catastral de los inmuebles, los siguientes:

- a) Los contribuyentes (Propietarios o poseedores a título de dueños) respecto a sus propios inmuebles.
- b) Los Organismos Nacionales, Provinciales o Municipales.
- c) El Poder Judicial de la Nación y de las Provincias.
- d) Las Instituciones crediticias oficiales o privadas.
- e) Los profesionales de la agrimensura, escribanos, abogados o quienes en virtud de su actividad profesional así lo requieran.
- f) Los terceros interesados que justifiquen fundadamente su petición, a cuyo efecto observaran el procedimiento que la Dirección Provincial de Catastro establezca, debiendo fijar su domicilio en la Ciudad de Río Gallegos.

Todo requerimiento se hará con una solicitud, con sellado de Ley, que llevará la firma, aclaración del nombre del peticionario y la acreditación del interés invocado, a cuyo efecto el Organismo Catastral podrá requerir la exhibición de la documentación que lo acredite.

Artículo 20: Son responsables y están obligados a cumplimentar la denuncia establecida en el artículo 55 de la Ley:

- a) Los propietarios inscriptos en el Registro de la Propiedad, con exclusión de los nudos propietarios.
- b) Los usufructuarios.
- c) Los herederos, cónyuge supérstite, administrador judicial o albacea, en los casos de sucesiones indivisas.
- d) Los compradores con escrituras otorgadas, pendientes de inscripción y los que tengan la posesión, sin escrituración otorgada.

e) Los que posean con ánimo de adquirir el dominio por prescripción adquisitiva, debiendo consignar esta circunstancia.

Artículo 21: A los infractores a la Ley de Catastro, se le impondrá las sanciones que el Código Fiscal establezca para las infracciones a los deberes formales, de acuerdo al procedimiento fijado por dicho Código.

Artículo 22: Los responsables consignados en el artículo 19 del presente, quedan obligados a declarar su domicilio fiscal actualizado, ante todo trámite, presentación o declaración jurada que deban efectuar ante el Organismo Catastral.

Artículo 23: A los efectos establecidos en el artículo 69 de la Ley, la Administración Pública Provincial, sus organismos, entes autárquicos y demás descentralizados, están obligados a colaborar con el Organismo Catastral, para la ejecución de la Ley y en especial para concretar los objetivos impuestos por la misma.

Con tal propósito, deberán comunicar al Organismo Catastral, en el tiempo y forma que este establezca, todas las modificaciones, incorporaciones, o supresiones de mejoras, que experimenten las parcelas sometidas a su jurisdicción, como también la habilitación, modificación o supresión de servicios públicos.

CAPITULO V - DE LA VALUACION PARCELARIA

Artículo 24: Serán objeto de justiprecio de acuerdo al artículo 41 y 46 de la Ley, las mejoras incorporadas a los inmuebles, cuando las mismas se encuentren en condiciones de habitabilidad. No se tendrán en cuenta para efectuar las operaciones de valuación, la ausencia de finales de obra

municipal, ni las habilitaciones comerciales pertinentes. La Dirección Provincial de Catastro, establecerá para cada planta urbana, las condiciones que deberán reunir las construcciones para no ser justipreciables.

Artículo 25: A los efectos establecidos en el artículo 53 inciso b) y c) de la Ley, los valores de las mejoras incorporadas o suprimidas con posterioridad a cada valuación general, se determinarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley, tomándose como valores básicos los establecidos en la última valuación general.

Artículo 26: El error de cálculo a que se refiere el artículo 53 inciso c) de la Ley, sobrevendrá cuando se haya empleado incorrectamente algunos de los términos utilizados para el cálculo de la valuación o cuando existiere algún error en las operaciones aritméticas. El error de concepto existe, cuando se introducen interpretaciones o apreciaciones equivocadas respecto al alcance de los factores de valoración utilizados.

Artículo 27: A los efectos establecidos en el artículo 53 inciso 4 de la Ley, habrá error de cálculo o de concepto cuando exista: un empleo incorrecto de los términos para calcular el avalúo, equivocación en la operación aritmética, interpretación conceptual y consecuente aplicación errónea respecto a características edilicias, geoeconómicas, tablas, formularios, etc..

Artículo 28: Los propietarios o poseedores a título de dueño podrán solicitar la corrección de las valuaciones, en caso de error de cálculo o de concepto, debiendo para ello solicitar la pertinente rectificación, acompañando todas las pruebas que justifiquen su petitorio.

Artículo 29: Las valuaciones determinadas por la Dirección Provincial de Catastro, serán notificadas a los responsables señalados en el artículo anterior, en la forma y modos que la misma establezca, quedando firmes si no fueren impugnadas por

los interesados en los plazos que en cada caso se determine. Las valuaciones conformadas tendrán vigencia a partir del 1 de Enero del año siguiente al de la fecha de notificación.

CAPITULO VI - DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 30: De conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley, las Direcciones Provinciales de Catastro y del Registro de la Propiedad, establecerán una minuta o formulario tipo, para cada uno de los siguientes actos sobre inmuebles: Transmisión de dominio, constitución de hipotecas, usufructo, declaratoria de herederos y ventas a plazos (Ley Nacional 14.005), las que deberán contener además de la nomenclatura catastral, cualquier otra referencia que hubiere certificado la Dirección Provincial de Catastro.

Artículo 31: Facultase a la Dirección Provincial de Catastro, a dictar las normas necesarias para la efectiva aplicación de la Ley número , disponer sobre los requisitos de registración y tramitación que se relacionen con las normas contenidas en el presente Decreto, así como para determinar el orden y la oportunidad de las distintas tareas a realizar para constituir el estado parcelario.

Podrá adoptar nuevos formularios, elaborar tablas de cualquier naturaleza, y en general modificar técnicas o metodologías, dentro de los límites que le impone la Ley.

Hasta tanto se concluya la elaboración e instrumentación de la documentación precedentemente señalada, será de aplicación las metodologías y documentos actualmente utilizados por el Organismo Catastral, en tanto no se contradigan con las disposiciones del presente Decreto.

Artículo 32: Los convenios de ejecución y cooperación catastral, que la Dirección Provincial de Catastro pretenda

formalizar, con las Municipalidades de la Provincia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68 de la ley, deberán ser autorizados y aprobados por el Poder Ejecutivo Provincial.

Artículo 33: Será facultad exclusiva del Director Provincial de Catastro, proponer al Poder Ejecutivo, la organización, misiones y funciones de la estructura administrativa del Organismo.

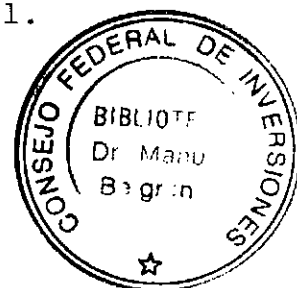
TAREA 3: FUNDAMENTOS DE LA ESTRUCTURA LEGAL PROPUESTA

El régimen legal que normatizará la actividad catastral provincial, esta conformada, por el anteproyecto de Ley de Catastro Territorial y por su Decreto Reglamentario, ambos textos elaborados en el marco del contrato con el Consejo Federal de Inversiones.

Las normas consignadas, brindarán un adecuado marco legal a una actividad estatal de primordial importancia para el desarrollo de la Provincia, al permitir registrar y publicitar con marcado grado de confiabilidad, el activo inmobiliario del territorio provincial.

Las bases fundamentales que sustentan el régimen catastral propuesto, se orientan principalmente a establecer los procedimientos básicos para: instrumentar el inventario de la riqueza territorial, individualizar geográficamente la propiedad, proporcionar un sistema de evaluación económica racional que permita planificar el desarrollo provincial con un claro conocimiento de la riqueza inmobiliaria territorial y su distribución espacial.

Para cumplimentar esas finalidades, en primer lugar se definió el alcance y contenido del Catastro Territorial, con un criterio registral, de carácter integral, pero de substancia principal geométrica-económica, a través de la individualización física de los inmuebles y su posterior evaluación económica; definiéndose asimismo su rol impositivo y de policía y ordenamiento administrativo del dominio, con una descripción detallada de sus funciones, así como de las atribuciones que le corresponde cumplimentar, en el ejercicio de su poder de policía inmobiliaria catastral.



Con el propósito de asegurar, el cumplimiento cabal de los objetivos y metas catastrales, se estableció expresamente, el perfil profesional, de la máxima autoridad, que conducirá su estructura organizacional, ponderando la naturaleza especial de la actividad catastral y la incumbencia profesional que más se vincula con ella, sin perjuicio de participar otras especialidades, dado el carácter multifuncional de sus actividades.

Por otra parte, la necesidad de delimitar la porción territorial que conforma el objeto material del documento básico dominial se consideró de alta prioridad, ajustandose a esos efectos el marco conceptual de la parcela y su forma de determinación y registración, ampliandose significativamente, con respecto al régimen legal anterior, los aspectos referidos al estado parcelario, su determinación y posterior verificación.

De igual manera se actualizaron y completaron los aspectos legales referidos al Registro de Constancias Parcelarias, legislandose con mayor precisión lo atinente al soporte administrativo de constancias parcelarias (cédulas), al Registro Gráfico Parcelario, a su clasificación catastral y a su individualización geográfica posicional (nomenclatura).

La correcta identificación parcelaria, a partir de la nomenclatura catastral posicional que en la actualidad se le asigna a las parcelas rurales y subrurales y de la nomenclatura tradicional que al efecto se le asignará a las parcelas urbanas, permitirá individualizar rápida e inequívocamente la ubicación de las mismas, en los registros gráficos correspondientes y lograr a través de su inserción obligatoria en los títulos de dominio, el único e inamovible nomenclador, determinante de la posición geográfica de las parcelas, en relación al conjunto parcelario de un área territorial considerada.

Como ha sido práctica en todas las jurisdicciones catastrales del país, el catastro fué instaurado en cada una de ellas, con una casi exclusiva finalidad fiscal, que si bien satisfacía las necesidades impositivas vigentes en esa época, no ofrecen en la actualidad, el nivel de información territorial que el desarrollo económico e institucional de los países reclama. De igual manera y consecuente con lo expresado con anterioridad, el alto valor económico que fue adquiriendo la riqueza inmobiliaria, obliga a precisar con mayor grado de seguridad, el límite territorial de esa riqueza, debiéndose contar para ello, con normas concretas que aseguren a través de determinaciones físicas ajustadas, la verdadera situación de hecho de los inmuebles, a fin de otorgarle mayor confiabilidad a la contratación inmobiliaria.

Por otro lado, en los umbrales de un nuevo siglo, la sociedad reclama para solucionar sus problemas de desarrollo, disponer de mayor cantidad y calidad de información territorial, que solo se logrará, con una estructura legal catastral, que posibilite conformar un catastro integral, con fines múltiples y altamente informatizado.

En el contexto legal propuesto, se sostiene en forma indubitable, la existencia del plano de mensura individual como instrumento esencial de determinación parcelaria, manteniéndose condicionalmente la validez del título de dominio para esa determinación parcelaria, hasta tanto se materialice la primera venta del inmueble respectivo o se modifique su estado geométrico por división o unificación.

Una consideración especial merece el capítulo dedicado al Régimen Catastral, en función de su rol de publicidad catastral. Si bien el régimen vigente, estatuido por la Ley 1966, incorporó el Certificado Catastral, como documento esencial de publicidad, la falta de reglamentación del mismo y la inexistencia de una estructura documental catastral integral y actualizada, imposibilitó su aplicación, lo cual impidió

plasmar un sistema interactivo entre los propietarios y las reparticiones vinculadas con la propiedad inmobiliaria.

A partir de la puesta en vigencia de una nueva estructura catastral, como es, la que se piensa incorporar con el **Programa Integral de Actualización y Perfeccionamiento Catastral**, que se instrumentará con financiamiento del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF) se deberá contar con una estructura legal como la que se propone, de caracter integral y polifuncional, donde la exigibilidad del Certificado Catastral resultará esencial para publicitar las constancias parcelarias de los inmuebles, relevados y registrados por dicho Programa, convirtiéndose en el medio eficaz de asegurar el conocimiento cabal de la situación física y económica, del bien objeto de transmisión inmobiliaria.

Si bien se establece la obligatoriedad del Certificado Catastral, con anterioridad al acto de transferencia del dominio; su ausencia solo tendrá de provisoriedad, la inscripción registral, hasta tanto se cuente con el mismo.

Con respecto al Avalúo Parcelario, se mantuvo en líneas generales, el regimen contenido en la Ley 1966, por considerarse que el mismo, resulta adecuado y compatible con las necesidades valuatorias actuales y con los sistemas mas avanzados en la materia. Solo se incorporaron textos aclaratorios o complementarios que la experiencia local y extraprovincial aconsejan incluir para garantizar al máximo la equidad impositiva y la racionalidad de las determinaciones fiscales.

Por último y muy especialmente, se consideró de interés formular un marco legal que posibilite estructurar un sistema de coordinación operativa eficaz, entre las reparticiones que a nivel provincial o municipal, realizan actos vinculados con la propiedad inmobiliaria. La importancia y trascendencia que la puesta en vigencia del referido sistema, tiene para la actualización y mantenimiento de la obra catastral, obliga a

estructurar un mecanismo de intercambio documental constante, que a la par de reducir al máximo el costo de la determinación catastral, permita contar con registros uniformes y confiables de información territorial, en todas y cada una de las reparticiones incorporadas al sistema.

Independientemente de lo expuesto, también resulta de importancia señalar, que para el conocimiento cabal de la problemática catastral, contenida en la nueva estructura normativa elaborada, resulta de indudable necesidad, explicitar el alcance y contenido particular de cada texto legal propuesto y su razón de ser y su grado de vinculación con las actividades y metas previstas en el mencionado Programa de Actualización y Perfeccionamiento Catastral. Para cumplimentar ese objetivo, se prevee realizar charlas explicativas con las instituciones o personas que la autoridad provincial, considere de interés realizar.

TAREA 4: CONSIDERACION DE LAS PROPUESTAS NORMATIVAS

Con el propósito de hacer conocer el alcance y contenido de las normas catastrales propuestas, se realizaron distintas reuniones, en las cuales participaron funcionarios del Gobierno Provincial y Autoridades y Profesionales de los Colegios de Escribanos y de Agrimensores de la Provincia de Santa Cruz.

En las mencionadas reuniones, se explicitó pormenorizadamente los fundamentos técnicos de cada texto propuesto, así como de sus implicancias legales y fiscales, y los mecanismos operativos a utilizar, para su instrumentación.

Asimismo, se enfatizó sobre la necesidad de contar con una estructura catastral básica, para la integral y correcta aplicación del plexo normativo elaborado, sin cuya existencia, resultaría dificultosa la puesta en marcha de cualquier plan catastral, en especial en la Provincia de Santa Cruz cuyas Autoridades preveen realizar a corto plazo un Programa Integral de Actualización y Perfeccionamiento Catastral.

Si bien, en cada una de las reuniones realizadas, se profundizó los aspectos catastrales más vinculados con sus respectivos quehaceres profesionales, no dejo de abordarse los restantes temas jurídicos y técnicos del régimen propuesto, pretendiendo con ello lograr un amplio conocimiento de las problemáticas planteadas y los institutos legales recomendados, para legitimar su operatividad.

Con ese criterio, a los representantes del Ministerio de Economía y Obras Públicas, se les explicitó más detenidamente los aspectos catastrales vinculados con la imposición inmobiliaria y con su estructura administrativa; a los representantes del notariado provincial, los temas relacionados con la determinación parcelaria, su publicidad y registración y

a los del sector de la agrimensura, todo lo atinente a la determinación parcelaria; su registración, verificación y actualización y mantenimiento de la información registrada, así como los aspectos metodológicos para la determinación de la valuación parcelaria y el grado de participación profesional en la elaboración y actualización de la información catastral.

Como corolario de las reuniones mantenidas, si bien en términos generales fueron de carácter informativa, se pudo inferir como consecuencia de la activa participación de los asistentes, el alto interés demostrado por los temas debatidos y su manifiesta preocupación para alcanzar los objetivos propuestos con los ordenamientos legales analizados, aspectos estos evidenciados por las acertadas preguntas formuladas y los criterios técnicos sustentados al exponer sus puntos de vista.

A los efectos de facilitar el desarrollo de las reuniones, se les entregó a cada uno de los participantes, un documento conteniendo exclusivamente los textos legales que a criterio del experto resultaban innovadores y vinculantes con las actividades y profesionalidades de los participantes (se adjunta).

Sin perjuicio de no haber abierto juicio de valor alguno, respecto a la calidad y probidad de los textos legales considerados, es de importancia señalar que a criterio del suscripto, la actitud de los participantes fué sumamente positiva, no sólo al aportar elementos o ideas al ordenamiento proyectado, sino fundamentalmente a sus expresos ofrecimientos de colaborar en la concreción de los objetivos previstos.

DETALLE de las Reuniones realizadas, en todas ellas con intervención del suscripto y el Director Provincial de Catastro Agr. Pablo Tudanca.

Día 15 de Noviembre de 1.999: A las 20 horas en el Colegio de Escribanos de la Provincia de Santa Cruz, con la participación de su Presidente Esc. Julio César Imberti; su Vicepresidente

Esc. Jorge Hugo Ludueña y su Secretaria Esc. Guillermina Vivanco Amuchastegui.

Día 16 de Noviembre de 1.999: A las 16 horas en el Ministerio de Economía y Obras Públicas, con la participación del Señor Ministro de Economía y Obras Públicas, don Gerardo Nieto y el Señor Subsecretario de Obras Públicas Arq. Ernesto Cobe.

Día 17 de Noviembre de 1.999: A las 20,30 horas, en el Colegio de Agrimensores, con la participación de su presidente Agr. Norberto Rocca y los siguientes profesionales: Agrim. Norma del Valle Romero, Agrim. Adela Arispon, Agrim. Maria Alejandra Piombi, Agrim. Eduardo Campbell, Agrim. Gerardo Borroni, Agrim. Mario Mendoza, Agrim. Alfredo Morello, y Agrim. Juan Subire.